

INFORME SECRETARIAL: Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). Al Despacho de la señora Juez el expediente **2021 – 00349**, informando que la accionada dio respuesta al requerimiento efectuado, se aportó la prueba decretada de oficio y a la fecha se encuentra para resolver la presente **ACCIÓN DE TUTELA**. Sírvase proveer.

ANA RUTH MESA HERRERA
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).

I. ANTECEDENTES

El señor Fredy Martínez Lesmes, identificado con cédula de ciudadanía 19.184.052, interpuso acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

Como sustento de sus aspiraciones, señaló que el 1 de junio de 2021 elevó derecho de petición ante Colpensiones, y recibió respuesta el 24 del mismo mes y año, pero, en su parecer, no es congruente para la solución del caso y desatiende de fondo lo pretendido.

Como consecuencia, solicitó se ordene a Colpensiones dar respuesta de fondo a su petición, sin formular respuestas evasivas o de simple trámite.

II. TRÁMITE Y CONTESTACIÓN

En proveído del 16 de julio de 2021, se admitió la presente acción de tutela y se requirió a la accionada para que diera contestación a la misma.

La **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones**, dio respuesta al requerimiento efectuado mediante Oficio BZ2021_8111674-1728385 del 19 de julio de 2021, solicitando denegar las pretensiones por considerarlas improcedentes.

Informó que el accionante radicó PQRS el 1 de junio de 2021, con radicado 2021_1423207, la cual fue atendida por la Dirección de Nómina de Pensionados en oficio del 24 de junio de 2021, notificado al interesado el 28 del mismo mes y año.

En proveído del 26 de julio de la presente anualidad, se decretó como prueba de oficio la conciliación o decisión adoptada dentro del proceso radicado 11001311001120170019500 ante el Juzgado 11 de Familia de Bogotá D.C., y se requirió a dicho Estrado para que aportara copia de dicha pieza procesal.

El **Juzgado 11 de Familia de Bogotá D.C.**, dio respuesta en oficio J11ºFB842 del 26 de julio de 2021, informando que el proceso ejecutivo no se adelanta ante dicho Despacho y que el expediente está en poder de la Oficina de Ejecución en Asuntos de Familia de Bogotá.

Para impartir celeridad al trámite, en auto del 27 de julio de 2021 se requirió tanto a las partes como a la Oficina de Ejecución en Asuntos de Familia de Bogotá, para que aportaran copia de la prueba decretada de oficio.

El **Juzgado 1º de Familia de Ejecución de Sentencias, por intermedio de la Oficina de Apoyo para los Juzgados de Familia de Ejecución de Sentencias de Bogotá D.C.**, dio respuesta al requerimiento el 27 de julio de 2021, en el sentido de aportar copia íntegra digital del expediente radicado 11001311001120170019500.

Igualmente, el **accionante** por medio de correo electrónico del 27 de julio de 2021, allegó copia de la sentencia proferida en el marco del precitado proceso 11001311001120170019500.

III. PROBLEMA JURÍDICO

Como problema jurídico, se estudiará si se vulnera el derecho fundamental de petición del promotor de la acción por el proceder de Colpensiones, y cuales las consecuencias jurídicas de ello.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 86 Superior, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, este Despacho es competente para conocer la presente acción constitucional.

2. Del derecho de petición.

Frente al Derecho Fundamental de Petición, cabe recordar que éste es de carácter constitucional con sustento en el artículo 23 de la Carta Política, en virtud del cual las personas tienen la facultad de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades y, además, a obtener pronta respuesta a ellas, por cuanto exige un pronunciamiento oportuno.

Dicho derecho, además fue regulado en la Ley 1755 de 2015, la que impone las reglas generales para presentar y contestar el derecho de petición, estableciéndose en su primer artículo *"Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011"*, refiriendo entonces el artículo 13 de la normativa sustituida que:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos de este código, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma respuesta".

En el mismo compendio normativo, se dispusieron los términos que se deben tener en cuenta para resolver los derechos de petición, de la siguiente manera:

"Art. 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora

y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2017, memorada en el proveído T-044 de 2019, indicó que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con las siguientes características para que se considere que se encuentra satisfecha el derecho fundamental bajo estudio:

"(i) Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a "falta para el servidor público y (...) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario."

(ii) Resolver de fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.

(iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado."

Sin embargo, es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional es consistente en sostener que el derecho de petición no supone que la Administración deba acceder a lo pedido, como se vio en la ya citada sentencia T-044 de 2019, en la que se estudió:

"Esta Corporación ha destacado además que la satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia de la respuesta favorable a lo solicitado. De modo tal se considera que hay contestación, incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. Así las cosas se ha distinguido y diferenciado el derecho de petición del "el derecho a lo pedido", que se emplea con el fin de destacar que "el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal."

Aunado a las anteriores consideraciones, aprecia esta Juzgadora que el derecho de petición, como los demás derechos fundamentales, cuentan con unos componentes que constituyen su núcleo esencial y otros que son denominados elementos estructurales. Los primeros son características ontológicas de las prerrogativas constitucionales, mientras que los segundos

se erigen como factores circundantes que permiten la garantía del derecho fundamental y que guardan cercanía con el núcleo esencial. De esta forma se expuso en sentencia C-007 de 2017:

"Este Tribunal ha precisado el entendimiento de los últimos tres requisitos en el sentido de establecer que los elementos estructurales se refieren a aquellos más cercanos a su núcleo esencial, es decir, los aspectos inherentes al ejercicio del derecho que consagren límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten dicho núcleo esencial, delimitado por la Constitución. Adicionalmente, ha definido el núcleo esencial como "como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse "el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental".

Entonces, abarcando propiamente el artículo 23 de la Constitución Política, la Corte Constitucional describió dichos aspectos en la sentencia T-058 de 2018, así:

"Siguiendo estas consideraciones, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-951 de 2014, por medio de la cual se estudió el Proyecto de Ley Estatutaria "(p)or medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", precisó que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) la respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión. En concordancia, se ha precisado que sus elementos estructurales son: (i) el derecho de toda persona a presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular; (ii) la solicitud puede ser presentada de forma verbal o escrita; (iii) la petición debe ser formulada respetuosamente; (iv) la informalidad en la petición; (v) la prontitud en la resolución; y (vi) la competencia del Legislador para reglamentar su ejercicio ante organización privadas".

En este punto, valga hacer énfasis acerca de la preponderancia que detenta la prueba documental que acredita el efectivo enteramiento al peticionario de la respuesta generada por la entidad pública o el particular receptor de la petición, pues sin esta no es posible perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional en sentencia T-149 de 2013:

"La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo

esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas.

A partir de esta reflexión, es claro que si la entidad está obligada a tener una constancia de la comunicación con el peticionario para probar la notificación efectiva de su respuesta, con mayor razón el juez constitucional, para evaluar el respeto al núcleo esencial de tal garantía debe verificar la existencia de dicha constancia y examinar que de allí se derive el conocimiento real del administrado sobre la respuesta dada”.

3. Caso concreto.

Descendiendo al caso bajo estudio, se aprecia que el 1º de junio de 2021 se radicó ante Colpensiones la petición 2021_6283918, en la que el promotor de la acción solicitó el cambio de la denominación del descuento de manutención de su hijo, que le es aplicado mensualmente sobre el monto de su mesada pensional. Dicha deducción, tiene como sustento la sentencia proferida por el Juzgado 11 de Familia de Bogotá D.C. el 7 de mayo de 2018, en el marco del proceso radicado 11001311001120170019500.

En dicha petición, el tutelante señala que Colpensiones realiza dicho descuento bajo la denominación de "*embargo*", lo cual le ha generado dificultades en sus transacciones comerciales y financieras, por cuanto la deducción no obedece a un embargo, sino a un descuento directo. Pese a que en los desprendibles de pago figuraba como "embargo/conciliación", en respuestas anteriores la entidad le comunicó que no era viable modificar la designación del descuento, como quiera que "*...la nómina de pensionados no tiene parametrizado en su aplicativo la opción de conciliación...*". Para resolver su solicitud, solicita que el descuento aplicado se denomine "descuento directo", como venía ocurriendo con anterioridad.

Como respuesta, en oficio BZ2021_6299241-1298959 del 24 de junio de 2021, Colpensiones le comunicó que, revisadas las bases de datos, existe un descuento a su mesada pensional y en favor de la señora Clemencia Torres Prieto, en los términos de la orden impartida por el Juzgado 11 de Familia de Bogotá, orden que está vigente, y que no se puede modificar el nombre de la deducción.

Sin embargo, si bien se notificó la respuesta en debida forma al interesado, se aprecia que la entidad se abstuvo de atender cada una de las peticiones por cuanto no se pronunció frente a la solicitud del certificado para constatar que la deducción se trata de un descuento directo más no de un embargo, como consta en la orden judicial que se cita.

En esos términos, según se aprecia en la prueba decretada de oficio por el Despacho, esto es, la sentencia proferida el 7 de mayo de 2018 en el proceso ejecutivo radicado 11001311001120170019500, se lee que en el acápite denominado "*3. De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado*",

en su numeral segundo se ordenó: "...el descuento directo del valor de la cuota alimentaria (...) de la pensión que percibe mensualmente el demandado **FREDY MARTÍNEZ LESMES** identificado con la cédula 19.184.052 de **COLPENSIONES...**"

Por lo anterior, resulta claro que ante la falta de pronunciamiento de Colpensiones frente a la petición elevada del certificado que se mencionó precedentemente, se vulneró el derecho fundamental invocado por activa, máxime cuando lo peticionado tiene sustento en la sentencia que ordenó efectuar las deducciones.

Como consecuencia, se amparará el derecho fundamental de petición del accionante y se ordenará a Colpensiones resolver de fondo frente a cada una de las inquietudes formuladas en el derecho de petición y que no han sido abordadas, aclarándose que la respuesta debe atender todas las preguntas formuladas, sin que aquí se imponga algún sentido a la decisión que la entidad adopte.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

- PRIMERO:** **AMPARAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN** invocado por el señor Fredy Martínez Lesmes, identificado con C.C. 19.184.052, por las razones expuestas.
- SEGUNDO:** **ORDENAR** al doctor Juan Miguel Villa Lora, en su calidad de Presidente de Colpensiones y/o al funcionario competente que haga sus veces en la entidad, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, proceda a dar respuesta de fondo y completa al derecho de petición radicado 2021_6283918 del 1 de junio de 2021, conforme lo expuesto en la parte motiva.
- TERCERO:** **ADVERTIR** a la accionada que el incumplimiento a esta decisión acarreará las sanciones correspondientes y que deberá informar al Despacho sobre el cumplimiento de la orden aquí impartida.
- CUARTO:** **NOTIFICAR** la presente providencia a las partes a través de correo electrónico, de conformidad con el Acuerdo PCSJA2011632 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y en atención a la situación

sanitaria del país por la enfermedad denominada COVID-19.

QUINTO: **ENVIAR** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, si en el término de ejecutoria esta decisión no es impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yudy', with a stylized flourish below it.

YUDY ALEXANDRA CHARRY SALAS

ERBC